



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veintinueve (29) de julio de dos mil diecinueve (2019)

Referencia: Acción popular
Accionante: Vanessa Pérez Zuluaga
Accionado: Notaria Única de San Luis de Gaceno.
Radicación: 15 001 3333 004 **2019 00143 00**

Revisado el expediente, el Despacho procede a pronunciarse sobre la admisión de la acción popular de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La abogada Vanessa Pérez Zuluaga promovió acción popular contra la Notaria Única de San Luis de Gaceno, al considerar vulnerados los derechos colectivos: i) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, ii) la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollo urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y iii) los derechos de los consumidores y usuarios, ante la omisión y negligencia de la entidad accionada cuya sede se encuentra ubicada en la Carrera 3 No 5-10 de ese municipio.

Indicó que el inmueble donde funciona la Notaría Única y en el que se prestan los servicios a la comunidad, no cumple con los parámetros y especificaciones establecidas en la NSR- 10 (Norma Sismoresistente Colombiana, Títulos J y K) y las Leyes 361 de 1997 y 1618 de 2013.

La demanda fue presentada inicialmente ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), quien mediante auto de 11 de julio de 2019 (f. 6) señaló que el notario cumple con **funciones administrativas** que aparejan potestades, que han sido atribuidas por la ley¹. Asimismo, dispuso la remisión del presente asunto a los Juzgados Administrativos (Reparto) de Tunja, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, norma que adjudicó la competencia para conocer de las acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de **las personas**

¹ Corte Constitucional Sentencia C- 1508 de 2000

privadas que desempeñen funciones administrativas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

II. CONSIDERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998 y el numeral 10º del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011², este Despacho es competente para conocer del presente trámite en primera instancia, adicionalmente porque según lo expuesto por la parte actora, el lugar de ocurrencia de los hechos es el municipio de San Luis de Gaceno, circunscripción que corresponde al circuito judicial de Tunja.

Así las cosas, el Despacho advierte que la demanda formulada por la abogada Vannesa Pérez Zuluaga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, carece de requisitos legales y anexos, de manera que la misma habrá de ser inadmitida con el fin de que se subsanen los siguientes aspectos:

1.- Falta de la reclamación previa como requisito de procedibilidad

El artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.” (Resaltado del Despacho)

Por su parte, el artículo 161 del CPACA preceptúa:

² ART.155- Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, municipal o local o las personas privadas que dentro de los mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.

(...)

“Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

(...)

4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código. (...).”

Verificado el escrito introductorio, el Despacho observa que no fue allegada prueba que acredite el cumplimiento del requisito de procedibilidad, esto es, la reclamación previa ante la autoridad accionada, por consiguiente se procederá a la inadmisión de la demanda, para que se aporte constancia del agotamiento del requisito previo que satisfaga las exigencias del artículo 144 de CPACA.

2. Falta de indicación de las pruebas que pretenda hacer valer.

El Despacho considera que en el asunto bajo estudio, la parte actora no aportó ni señaló el material probatorio que permita demostrar la existencia de vulneración de los derechos colectivos invocados, incumpliendo con el requisito señalado en el literal e) del artículo 18 de la Ley 472 de 1998, que establece:

“ARTICULO 18. REQUISITOS DE LA DEMANDA O PETICIÓN. Para promover una acción popular se presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos:

(...)

e) Las pruebas que pretenda hacer valer”

Lo anterior, por cuanto en materia de acciones populares la carga de la prueba la tiene el actor; conforme a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, así las cosas, no basta con indicar que determinados hechos violan los derechos e intereses colectivos para que se tenga por cierta su afectación o vulneración; el demandante tiene la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos de sus alegaciones³

En tal virtud, la parte actora deberá presentar con la demanda las pruebas que permitan demostrar la existencia de vulneración de los derechos colectivos invocados.

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. AP-1499 de 2005.

Con fundamento en lo expuesto, el Juzgado inadmitirá la demanda con el fin de que la misma sea corregida, en el término de tres (3) días, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998

En mérito de lo anterior, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

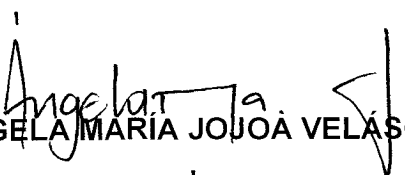
RESUELVE:

Primero: Avocar el conocimiento de la acción popular de la referencia.

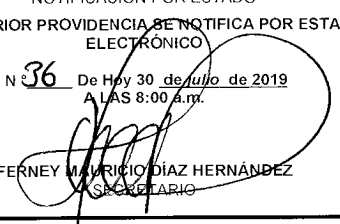
Segundo: Inadmitir la demanda de acción popular presentada por la abogada Vanessa Pérez Zuluaga contra la Notaría Única de San Luis de Gaceno.

Tercero: Conceder a la parte actora el término de tres (03) días para que corrija la demanda, y subsane los defectos anotados en la parte motiva de esta providencia, so pena de rechazo.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOÁ VELÁSQUEZ
Juez

⁴AMRS

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA NOTIFICACIÓN POR ESTADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO N° <u>36</u> De Hoy 30 de julio de 2019 A LAS 8:00 a.m.  FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

⁴ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 30 de julio de 2019 en la página web www.poderjudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández Secretario